

## 21ª SESION ORDINARIA DEL 23 DE JULIO DE 1886

Presidencia del Dr. Serú.

**SUMARI** Asuntos entrados—Aprobacion sobre tablas del dictámen de la comision de peticiones en el proyecto de ley autorizando al poder ejecutivo á entregar una suma al señor Calvo para facilitar la publicacion de varias obras americanas—Continúa la discusion pendiente sobre el dictámen de la comision de códigos en el proyecto de ley en revision, relativo á la organizacion de los tribunales.

**PRESENTES**

Albarracin  
Alcorta  
Arauz  
Araujo  
Avellaneda  
Barra  
Berdia  
Bermejo  
Bruchmann  
Bustillo  
Caceres  
Calvo  
Calderon  
Carballido  
Cano  
Carbonell  
Castro  
Colombres  
Coquet  
Corvalan  
Crespo  
Espinosa  
Estrada  
Figueroa (F. J.)  
Figueroa (M. A.)  
Gallo  
Garcia  
Gül  
Gomez  
Goyena  
Huidobro  
Laines  
Leguizamon  
Lubari  
Luro  
Malbran  
Mansilla  
Olmedo

—En Buenos Aires, á 23 de julio de 1886, reunidos en su sala de sesiones los señores diputados inscriptos al márgen, el señor presidente declara abierta la sesion, siendo las 2 y 30 p. m.

**ACTA**

—Se lee y aprueba, sin observacion, la de la sesion anterior.

**ASUNTOS ENTRADOS****COMUNICACIONES OFICIALES**

Poder ejecutivo nacional.

Buenos Aires, julio de 1886.

Al honorable congreso de la nacion.

El rápido desenvolvimiento que se opera en todos los lugares que atraviesa ó á que se aproxima el ferro-carril central norte, ha sido superior á todos los cálculos, y la práctica ha demostrado que el tren rodante de esa linea no está en proporcion con las exigencias del servicio.

A este antecedente debe agregarse la circunstancia de que el ramal á Chumbicha y la prolongacion á Jujuy, tienen que

Padilla  
Paz  
Portela  
Pino  
Posse  
Pujol Vedoya  
Riquelme  
Roca  
Rodriguez  
Ruiz  
Ruiz de los Llanos  
Serú  
Sold  
Solari  
Soler  
Sosa  
Tagle  
Vidal  
Villamayor  
Yofre  
Zavalla  
Zeballos  
Zorrilla

**AUSENTES****CON LICENCIA**

Demaria  
Ocampo  
Teran  
Torrent

**CON AVISO**

Presidente  
Acosta  
Augier  
Cabeza  
Civit

ser servidas por los mismos elementos de la via principal, lo que hace mas difícil esta situacion, precisamente cuando el tráfico empieza á tomar mayores proporciones.

Además de los perjuicios que sufren con este motivo los intereses generales y particulares, el gobierno se vé obligado á hacer gastos extraordinarios por la misma causa, pues en solo el año pasado, ha tenido que pagar cuarenta y dos mil pesos á la empresa del ferro-carril central argentino por el tiempo que ha sido indispensable retener sus wagones.

Para suprimir tan serias dificultades y poder obtener al mismo tiempo todas las ventajas que la nacion debe esperar de una de sus principales líneas férreas, es urgente aumentar su material rodante.

El administrador del ferro-carril y el departamento de ingenieros han hecho los estudios del caso y resulta que se quiere la adquisicion de doscientos treinta y cuatro vehículos de diversas clases, cuyo costo se estima en la suma de seiscientos mil pesos (600,000 ps.) que no serán desembolsados de una sola vez sino conforme lo haga necesario el movimiento actual y su crecimiento ulterior.

A este objeto responde el adjunto proyecto de ley, que el poder ejecutivo tiene el honor

Dantas de someter á la consideracion de  
 Gorostiaga V. H.  
 Laurencena Dios guarde á V. H.  
 Villagra  
 Videla JULIO A. ROCA.  
 Viso C. Pellegrini.  
 Yramain

SIN AVISO

PROYECTO DE LEY

Fernandez  
 Leloir El senado y cámara de diputados, etc.  
 Morán

LEY

Art. 1º Autorízase al poder ejecutivo para invertir hasta la suma de seiscientos mil pesos (600,000 ps.) en la adquisicion de tren rodante para el ferro-carril Central Norte.

Art. 2º El gasto autorizado se imputará á la presente ley.

Art. 3º Comuníquese al poder ejecutivo.

Chavarria.

(A la comision de obras públicas.)

El Poder Ejecutivo Nacional.

Buenos Aires, Julio 1886.

Al honorable congreso de la nacion.

Los recursos votados para la prolongacion del ferro-carril central norte se hallan invertidos casi en su totalidad, y el poder ejecutivo tiene el honor de pedir á V. H. que le autorice á disponer de la cantidad de 957,000 pesos para la prosecucion de esas obras.

La seccion del ferro carril hasta Metan ha sido entregada al servicio público, pero aun faltan algunas obras accesorias que, ademas de ser el complemento indispensable de esta línea, son cada dia mas exigidas por las necesidades y la seguridad misma del tráfico. Para dejar la seccion definitivamente terminada y para el pago de trabajos ya realizados en la misma, se requiere la suma de 557,000 pesos, segun los estudios y presupuestos hechos por el director de las obras y el departamento de ingenieros.

Por razones que son del dominio de V. H. aun no ha sido posible dar ejecucion á la ley de 16 de octubre del año pasado, que autoriza al poder ejecutivo para contratar con los señores Lúcas Gonzalez y Cia. la prolongacion de esta línea férrea. Ha sido por lo mismo preciso llevar adelante los trabajos en las secciones comprendidas entre Metán y Chilcas, y este último punto y Cobos, á fin de dar aplicacion á los numerosos elementos de construccion que se tenían reunidos, y de evitar el deterioro tanto de las obras concluidas y pendientes, como de los materiales acumulados.

En prevision de que se demorase hasta fines de setiembre la sancion de las reformas pedidas á la

ley núm. 1733 y que son necesarias para la celebracion del contrato que ella autoriza con los señores Lúcas Gonzalez y Cia., el poder ejecutivo ha estimado conveniente incluir en esta autorizacion la suma de 200,000 pesos destinados á la continuacion de los trabajos que hasta dicha época se llevaron á cabo en cada una de las secciones referidas.

Reunidas estas cantidades hacen el total de 957,000 pesos á que se refiere el proyecto adjunto, cuya sancion reviste el carácter de verdadera urgencia por los perjuicios directos é indirectos que acarrearían indudablemente la paralización en la construccion de esta línea, tan reclamada ya por las exigencias y el movimiento creciente de una de las mas importantes regiones de la república.

Dios guarde á V. H.

JULIO A. ROCA.

Isaac M. Chavarria.

PROYECTO DE LEY

El senado y cámara de diputados de la nacion, etc.

LEY:

Art. 1º Autorízase al poder ejecutivo para invertir hasta la suma de 957,000 pesos en la prosecucion de las obras de prolongacion del ferro-carril central norte.

Art. 2º El gasto autorizado se imputará á la presente ley.

Art. 3º Comuníquese al poder ejecutivo.

Isaac M. Chavarria.

(A la comision de obras públicas.)

—El señor presidente del senado remite, en revision, un proyecto de ley referente al establecimiento de un banco hipotecario nacional.

(A la comision de hacienda.)

—El señor juez federal de Jujuy remite copia legalizada de la insaculacion de las mesas receptoras de votos.

(A la comision de poderes.)

—El señor juez federal de la Rioja remite copia legalizada del acta de insaculacion de las mesas receptoras de votos.

(A la comision de poderes.)

DESPACHO DE LAS COMISIONES

La de peticiones se ha espedido en el proyecto del senado, autorizando al poder ejecutivo para abonar veinte mil pesos á los herederos de don J. B. Alcorta.

(A la órden del dia.)

PETICIONES PARTICULARES

La señora Vicenta Alagon de Velez, hija del te-

bierno argentino con el de los Estados Unidos.

Puede que el secreto de la prosperidad colossal del gran pueblo esté oculto en sus libros.

El señor Calvo, distinguido constituciona lista, al par que conoce á fondo la lengua inglesa, nos garante desde ya la autenticidad de los textos, como otro autor argentino en el presente nos la ofreceria con dificultad.

Creo innecesario agregar otras consideraciones para fundar el dictámen.

- Se aprueba el proyecto en general.

-En discusion el artículo 1°.

**Sr. Lainez**—Desearia conocer el artículo 1° del proyecto presentado por el señor diputado Yofre.

Se lee:

«Art. 1° La nacion contribuirá con la suma de cinco mil pesos para la publicacion de Cushing «Lex parliamentary» y Paschall «Annotated constitution», cuya traduccion se propone hacer el señor don Nicolás Calvo.»

**Sr. Lainez** —Y el segundo?

—Se lee:

«Art. 2° Este gusto se hará de rentas generales, imputándose á la presente ley.»

**Sr. Lainez**—Está bien: me basta.

—Se vota el artículo en discusion y es aprobado, siéndolo igualmente el artículo 2°. El artículo 3° es de forma.

#### \* ORGANIZACION DE LOS TRIBUNALES

**Sr. Presidente**—Se vá á pasar á la órden del dia.

**Sr. Secretario**—Estaba en discusion el siguiente artículo, propuesto por el señor diputado Ruiz de los Llanos: «Intervendrán en los juicios por jurados autorizados por la ley de la provincia de Buenos Aires de 8 de mayo de 1828, que se declara vigente, mientras el congreso no legisle sobre delitos de imprenta; pero no podrán emitir opinion ni votar en las deliberaciones, limitándose á aplicar las penas que por la ley correspondan segun la declaracion del jurado.»

**Sr. Posse**—Creo que el artículo propuesto por la comision es el que debe ponerse en discusion.

**Sr. Presidente**—Sí, señor.

Sírvase leer de nuevo el artículo de la comision.

—Se lee:

«Intervendrán en los juicios por jurados, en los casos determinados por la ley de procedimientos; pero no podrán emitir opinion ni votar en las deliberaciones, limitándose á aplicar las penas que por la ley correspondan segun la declaracion del jurado.»

**Sr. Presidente**—Este es el artículo que está en discusion.

Entiendo que ha sido suficientemente apoyado el artículo propuesto por el señor diputado por Salta.

**Sr. Secretario**—Sí, señor.

**Sr. Presidente**—Se resolverá despues si la cámara ha de tomar en consideracion el artículo propuesto por el señor diputado, segun sea el resultado de la votacion sobre el artículo que está en discusion.

**Sr. Ruiz de los Llanos**—Pido la palabra.

He impugnado el artículo de la comision porque tal como está, es á mi juicio inútil; y esto me parece que lo han reconocido los mismos señores diputados miembros de la comision que sostiene este despacho.

La disposicion que manda que los jueces del crimen intervengan en los juicios por jurados en los casos determinados por la ley de procedimientos, es una disposicion inútil en la práctica.

Por esa razon, habia propuesto en su reemplazo la redaccion que se ha leído.

Se vota el artículo en discusion y es rechazado.

**Sr. Presidente**—La cámara resolverá ahora, por una votacion, si pasa á comision el artículo propuesto por el señor diputado por Salta, ó si se trata sobre tablas.

Los que piensen que debe pasar este asunto á comision, sírvanse ponerse de pié.

Así se hace, resultando negativa.

**Sr. Presidente**—La cámara resolverá entonces si se trata este asuntosobre tablas.

**Sr. Ruiz de los Llanos**—No es necesario que se verifique esa votacion, porque está resuelto implícitamente que se trate ahora.

**Sr. Presidente**—No ha habido una votacion positiva.

Sírvanse entonces ponerse de pié los que crean que este asunto debe tratarse sobre tablas.

**Sr. Gomez**—Eso ya está resuelto. ¿A qué se vá á votar?

**Sr. Ruiz de los Llanos**—Está resuelto; sí, señor.

**Sr. Lainez**—Desde que no pasa á comision, es claro que la cámara desea tratarlo sobre tablas.

**Sr. Ruiz de los Llanos**—El trámite reglamentario es este: si se trata sobre tablas ó si pasa á comision un artículo que se presenta en la discusion de un proyecto.

Y desde que se ha resuelto que no pase á comision, es porque se quiere tratarlo sobre tablas.

**Sr. Presidente**—Si así lo entiende la cámara, se procederá de esa manera.

Está en discusion.

**Sr. Colombres**—Pido la palabra.

Es simplemente para proponer al señor diputado que cambiara la redaccion de este artículo.

Me parece muy peligroso, y, por otra parte, es una incongruencia, esto de venir á intercalar en una ley orgánica de los tribunals, una disposicion que no es ni siquiera complementaria, pues es toda una ley integra.

Así es que yo propondría esta redaccion: «Intervendrán en los juicios por jurados, en los casos de delitos de imprenta.»

Si no tuviera inconveniente el señor diputado en aceptar esta modificacion.

**Sr. Ruiz de los Llanos**—Pido la palabra.

Me es muy sensible no poder prestar asentimiento á la indicacion que acaba de hacer el señor miembro informante de la comision.

El propone que se sustituya la fórmula por mi propuesta, por esta otra: «Intervendrán en los juicios por jurado, en los casos de delitos de imprenta.»

Pero si no hay ley que permita el enjuiciamiento por jurados de los delitos cometidos por medio de la prensa, es claro que no va á llegar el caso, y nos vamos á encontrar en la misma situacion en que nos hemos encontrado con la ley vigente, con el artículo 53, cuya cópia testual es lo que propone la comision.

Por consiguiente, me parece que, ó debe adoptarse el temperamento propuesto por mí, ó ningun otro, suprimiéndose completamente el artículo.

**Sr. Yofre**—Pido la palabra.

**Sr. Ruiz de los Llanos**—Aún no he concluido.

Por lo demás, no encuentro la gravedad que se atribuye al hecho de que en esta ley orgánica de los tribunales intercalemos, como decía el señor miembro informante, toda una ley reglamentaria para el enjuiciamiento de los delitos de imprenta, sobre todo, cuando en esta misma ley orgánica de los tribunales hemos intercalado toda la ley de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires.

**Sr. Colombres**—Tal vez no tendría inconveniente en aceptar la redaccion que propone el señor diputado, si se colocara entre las disposiciones complementarias.

**Sr. Ruiz de los Llanos**—Es lo mismo.

Si el señor diputado desea que este artículo se traslade al capítulo de las disposiciones transitorias, por mi parte no hay inconveniente en que así se haga, desde que se establezca claramente que esta vigencia de la ley de 1828 no subsistirá sino en tanto que el congreso no legisle especialmente sobre delitos de imprenta.

Me parece que esta disposicion tiene carácter transitorio, cualquiera que sea su colocacion material.

Por lo demás, repito lo que dije en la sesion anterior: Me parece que es preferible tener la ley de 1828, con deficiencias, á no tener ninguna ley sobre esta materia.

La provincia de Buenos Aires, que es indudablemente la mas adelantada de la república, está rigiéndose, sobre esta materia, por la ley del año 28, mientras que nosotros tropezamos con inconvenientes serios para el enjuiciamiento de estos delitos cometidos por la prensa.

No es ahora el momento de repetir cuales son esos inconvenientes.

He dicho.

**Sr. Yofre**—Pido la palabra.

No pude concurrir á la sesion anterior, y me toma de nuevo la mocion hecha, y aceptada al parecer por la cámara, tratando de interpolar en esta ley que discutimos, toda una ley de enjuiciamiento para los delitos de imprenta, que viene á exhumarse, por decirlo así, de una manera incidental.

Segun mis recuerdos, esa ley establecía el juicio por jurados para este género de delitos, detallando el carácter de las publicaciones que debían ser acusados. No sé si, al mismo tiempo, permitía el juicio por la vía ordinaria, en algunos casos.

En presencia de una situacion como esta, me parece un poco irregular entrar desde ya á aceptar una ley no conocida, tal vez, por la mayoría de los señores diputados.

Entre el temperamento de aceptarla inmediatamente ó de incluirla en las disposiciones transitorias, yo estaría por esto último, porque, al fin, dispondríamos así del tiempo necesario para poder leerla y formar juicio sobre su mérito y sobre las condiciones en que podamos incorporarla á la ley actual, que trata de una materia completamente distinta.

Es tanto mas anormal este proceder, cuanto que el congreso, desde hace algunos años,

tiene á su consideracion un proyecto del señor diputado por Buenos Aires, doctor Villamayor, me parece, sobre ley de imprenta; y es un anacronismo que vengamos nosotros, al sancionar esta ley, á hacer revivir la de 1828 para estos juicios.

**Sr. Ruiz de los Llanos**—Yo no hago absolutamente cuestion de colocacion.

**Sr. Presidente**—El señor diputado por Córdoba ¿hace alguna indicacion?

**Sr. Yofre**—La hago para que pasemos á tratar los otros artículos, dejando este para las disposiciones transitorias.

Yo no he leído la ley que se trata de poner íntegramente en vigencia, y algunos otros diputados se encuentran en el mismo caso.

Del año 28 á la fecha, hemos andado mucho, para venir ahora á colocar esta ley como una interpelacion, segun decia antes, en el proyecto actual, aún cuando nos encontramos en la situacion difícil á que ha hecho referencia el señor diputado por Salta.

Hago, pues, indicacion á fin de que posterguemos esta parte para las disposiciones transitorias.

Apoyado.

**Sr. Presidente**—El señor diputado autor del artículo que se discute ¿no tiene inconveniente en aceptar?

**Sr. Ruiz de los Llanos**—No tengo ningun inconveniente; pero hago presente que el artículo es de la cámara.

**Sr. Presidente**—Entonces, está en discusion la indicacion hecha por el señor diputado por Córdoba.

**Sr. Yofre**—Mi indicacion es concurrente: tiene por objeto facilitar, mas bien que escluir, el pensamiento del señor diputado por Salta.

**Sr. Villamayor**—Pido la palabra.

Para votar, yo deseo saber qué objeto se propone al señor diputado en la postergacion de la discusion de este artículo.

**Sr. Yofre**—Por lo que hace á mi personalmente, puedo decirle esto: no recuerdo bien la ley de 1828, y me parece una irregularidad que incidentalmente vengamos á incorporar á la ley actual, toda una ley que no conocen absolutamente algunos, ó que otros conocen imperfectamente.

Mi pensamiento es darnos tiempo para estudiar esta ley y poder salvar las deficiencias que la legislacion vigente en la capital tenga, modificándola si es necesario.

**Sr. Villamayor**—Yo entiendo que la indicacion del señor diputado por Salta, no es precisamente para que se trate de la ley de 1828, que indudablemente ha de ser susceptible de modificaciones.

El señor diputado propone establecer la vigencia de esa ley para llenar un vacío, porque no hay ninguna ley. Por eso dice: Es preferible la vigencia de la ley del año 28, que establece el jurado, con todos los defectos que tiene, antes de no tener ninguna.

Entonces, señor presidente, yo voy á votar por la indicacion del señor diputado por Salta.

Por mi parte, creo tambien que la ley de 1828 es deficiente, y por eso fué que, como lo ha recordado mi honorable colega por Córdoba, presenté, hace algunos años, un proyecto de ley de imprenta, proyecto que, á mi juicio, llenaba la necesidad sentida y, que cuando menos podia servir de base á un proyecto mas completo, meditado por el estudio de la comision y mejorado en la discusion que tuviera lugar en la cámara.

La ley de 1828 establece el jurado, aunque, si mal no recuerdo, establece tambien, en algunos casos, la justicia ordinaria para el conocimiento de ciertos delitos... establece el jurado exclusivamente, me dice el señor diputado por Salta.

Como yo creo que no hay libertad de la prensa sin tener por juez competente al jurado, he de votar por el artículo que se propone, creyendo que él viene á garantizar, hasta cierto punto, esa libertad tan preciosa.

**Sr. Yofre**—Yo tampoco me opongo á ese artículo. Quiero únicamente que nos déen tiempo para conocer la ley. Desde ya acepto el juicio por jurados, y no lo combato.

**Sr. Barra**—Pido la palabra.

Para adherir á la mocion hecha por el señor diputado por Córdoba.

Se trata de una cuestion fundamental é importante, como es la de establecer una legislacion sobre la prensa, y no puede ser considerada y resuelta así con ligereza, por incidente, como lo seria en este caso. Merece estudio y meditacion.

Yo, que pertenezco á la prensa desde hace muchísimos años y que pudiera, por lo tanto, creer que sus libertades sufren con la supresion del enjuiciamiento por jurados, soy, por el contrario, radicalmente opuesto á tal institucion, y no querría desde ya comprometer opiniones, cuando mas adelante puede tratarse la legislacion de imprenta, adhiriendo desde luego á una fórmula que mi conciencia no considera como una garantia de la libertad de la prensa.

Ejemplo de esto: no tiene el jurado una responsabilidad directa para fallar en estas cuestiones; falla simplemente por elementos de conviccion, cuando muchas veces se trata de cuestiones de puro criterio legal.

Sucedia así con los antiguos tribunales de

comercio, formados con hombres buenos que se llamaban cónsules, asesorados por un juez letrado. El juez letrado era el verdadero tribunal y era el que, en realidad, fallaba todas las cuestiones, sin responsabilidad propia, librándose á las permitidas li viandades de la ignorancia ó de la excesiva buena fé de los cónsules.

Pero, al correr del tiempo, las necesidades públicas y la experiencia enseñaron que era preciso recurrir únicamente á ese juez que estaba aleccionando á los ignorantes ó incompetentes, haciéndolo responsable de la legalidad de sus fallos.

Después de esto, recién hemos visto tanta confianza inspiran á la sociedad nuestros tribunales de comercio.

Igual cosa sucede con los jurados de imprenta.

La República ha presenciado en todas sus generaciones, lo que importan el jurado de imprenta y el fallo de ese jurado.

Es un fallo de impresion, simplemente.

Aquello que se encuentra favorecido por las auras de la opinion ó por otras circunstancias mas ó menos apasionadas, impresionablemente á los hombres que no están posesionados de sus deberes legales y que, por lo mismo, tienen solo que ceder á las sujestiones de su criterio personal.

Repito, señor; encuentro que se vá á tratar una cuestion sumamente seria, por incidente; y yo querría reservar mis opiniones al respecto, para que cuando se presente á la consideracion del congreso la legislacion de imprenta, pueda apoyar estas mis ideas en los antecedentes que influyen en mi espíritu.

Es por eso que adhiero á la indicacion de que se postergue este punto para las disposiciones transitorias.

**Sr. Mansilla**—Pido la palabra.

Esta votacion presenta inconvenientes á mi punto de vista.

Descartaría preguntar al señor diputado por Córdoba, autor de la mocion, si él, de antemano, se compromete á votar por el artículo tal como lo propone el señor diputado por Salta, dándole otra colocacion.

**Sr. Yofre**—Mi mocion se funda en la falta de recuerdos de la importancia de esta ley.

La conozco, pero actualmente no recuerdo sus disposiciones.

El principio mismo de la ley, he manifestado ya que me gusta, que no me opongo al juicio por jurados; pero pienso que debemos darnos tiempo para leer la ley que se trata de incluir incidentalmente en un artículo del proyecto sobre organizacion de los tribunales de la capital, materias completamente heterogéneas.

**Sr. Mansilla**—De manera que, si la ley

del año 1828 no gusta al señor diputado, cuando haya refrescado su memoria, y después de exhumarla, según sus propias palabras, votará en contra de este artículo.

Esto es lógico.

Entonces nos vamos á quedar sin ley, y, entre no tener ley, ó tenerla, yo prefiero lo último.

**Sr. Yofre**—El dilema no es exacto.

**Sr. Mansilla**—Por otra parte, no se puede discutir el juicio por jurados ante un congreso argentino, porque el congreso argentino hasta este momento ha faltado á un principio constitucional, no dando la ley del juicio por jurado que le manda la constitucion.

Y es muy extraño y muy sorprendente que sean abogados distinguidos del foro los que hagan este argumento á los que somos legos: no conocemos la ley.

¿Qué habría dicho ese abogado si hubiera ido un periodista á pedir que lo sostuviera en un jurado ante la provincia de Buenos Aires? ¿Deme tiempo para estudiar esa ley porque no la conozco?

No dudo absolutamente de la sinceridad del señor diputado, aunque dudo de la ignorancia que él manifiesta tener en este momento; pero, como estoy acostumbrado á ver que, por medio de estas evoluciones, se tuerce el pensamiento sincero de la cámara, me permito hacerle esta pregunta.

Yo participo de las opiniones del señor diputado por Salta: la colocacion no me importa; lo que me importa es que el principio prevalezca.

Pero, como antes que el señor diputado por Córdoba tomara la palabra, una sancion de la cámara habia hecho suyo el pensamiento del señor diputado por Salta, y como este pensamiento se encuentra apoyado por una autoridad en esta materia, por el señor diputado Villamayor, que ha presentado hace muchos años un proyecto sobre el particular; voy á votar con toda tranquilidad por este artículo, cualquiera que sea la colocacion que se le dé; pero, por una precaucion parlamentaria, voy á votar porque se mantenga la posicion en que en este momento está la redaccion propuesta por el señor diputado por Salta.

**Sr. Yofre**—Pido la palabra.

Para aclarar un poco mi pensamiento.

Estrafío mucho que el señor diputado que deja la palabra, hombre avezado á la vida pública, y que en el tiempo que ha permanecido en ella, ha demostrado ser un hombre de estado, precipite de tal manera la solucion de leyes como la presente.

El formula un dilema que no es exacto, porque entre aceptar ó rechazar una ley, siempre hay el término de mejorarla, salvando

do los principios generales sobre que está calcada.

Yo no he dicho que absolutamente no conozca la ley; he dicho solo que no la recuerdo bien, que desearía refrescar mis recuerdos; y que bien podría presentarse indicaciones que la modifiquen de una manera conveniente para incorporarla en la ley que estamos discutiendo.

Esta es la indicacion que desearía que tenga presente la cámara al votar la indicacion que he formulado.

**Sr. Presidente**—Se votará la mocion del señor diputado por Córdoba, para que se suspenda la discusion de estos artículos hasta que llegue el momento de tratarlos en las disposiciones generales de la ley que se discute.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Carballido**—Pido la palabra.

Para hacer una simple modificacion que creo que la comision no tendrá inconveniente en aceptar.

Todos los capítulos que se refieren a los distintos jueces de primera instancia traen estas palabras: «sus sentencias y resoluciones serán apelables en segunda y última instancia para ante la respectiva cámara.»

No me parece que haya razon alguna para que en este capítulo se suprima esas palabras.

La ley orgánica vigente adolece tambien de esta omision.

No es extraño que este antecedente haya influido para que se suprima en este capítulo ese artículo.

No sé si la comision tiene inconveniente en aceptar lo que propongo.

El artículo quedaría entonces igual al 46, cambiándole solo: «para ante la cámara de lo criminal.»

**Sr. Presidente**—A qué artículo se refiere el señor diputado?

**Sr. Carballido**—A un artículo que seguiría al último sancionado.

**Sr. Presidente**—Es un artículo nuevo?

**Sr. Carballido**—Sí, señor.

**Sr. Posse**—La comision acepta.

—Se lee en esta forma:

«Sus sentencias y resoluciones en las causas que conozca originariamente, serán apelables en segunda y última instancia para ante la cámara de lo criminal.»

**Sr. Figueroa (M. A.)**—La palabra originariamente esta demás.

**Sr. Carballido**—Mi indicacion tiende a que el artículo sea igual al 46.

**Sr. Presidente**—Entonces, debiendo reputarse una aclaracion a los artículos sancio-

nados, se dará por aprobado el artículo en la forma leída, con la supresion de la palabra *originariamente*.

—Así se hace.

—Se pasa a discutir el capítulo IV  
De los jueces de lo correccional, artículo 54.

**Sr. Figueroa (M. A.)**—Pido la palabra.

Propodría la supresion en este artículo de las palabras: «que correspondan a la jurisdiccion de la capital.»

Estamos legislando para la capital, y no se necesita, al establecer la jurisdiccion de los jueces, que espresemos que han de conocer estos en aquellas causas que correspondan a la jurisdiccion de la capital.

Estas palabras se encontraban en la ley de procedimientos de la provincia de Buenos Aires, cuando esta capital hacia parte de aquel estado. Entonces era necesario establecer la diferencia de jurisdiccion distinguiendo las secciones del norte, centro y sud, en que estaba dividida la provincia de Buenos Aires.

Hoy no tiene razon de ser esta diferencia, desde que estamos legislando para la capital, única seccion judicial.

El artículo podría quedar en estos términos: «Los jueces de lo correccional conocerán en primera instancia de los delitos en que la pena corporal exceda de un mes de duracion, ó la de multa de 100 pesos, y no pase de un año de prision ó 1000 pesos de multa.»

**Sr. Presidente**—¿Propone esa modificacion?

**Sr. Figueroa (M. A.)**—Sí, señor; la supresion de estas palabras: «que corresponde a la jurisdiccion de la capital.»

Creo que están de mas.

**Sr. Posse**—Para la comision, es lo mismo con esas palabras que sin ellas.

Si se quitan, no se perjudica; si se ponen, no se quebranta ninguna regla gramatical.

**Sr. Figueroa (M. A.)**—Pero están de mas, y lo que está de mas no debe ponerse.

**Sr. Presidente**—Entonces ¿la comision no tiene inconveniente en aceptar la modificacion?

**Sr. Posse**—Ninguno.

**Sr. Ruiz de los Llanos**—Pido la palabra.

A mi me parece, como al señor diputado por Catamarca, que es necesario suprimir esas palabras, como se han suprimido, en el artículo correspondiente, en lo referente a los jueces del crimen. Tambien existian

allí, y la comision accedió á que se suprimieran.

Pero tengo otra observacion que hacer.

Me parece que este artículo está tomado textualmente de la ley vigente, que no hay ninguna modificación.

En él se dice: «y en los delitos en que la pena corporal exceda de un mes de duracion ó de una multa de cien pesos y no pase de un año de prision ó mil pesos de multa»

Esto me parece que supone una jurisdiccion inferior á la del juzgado de lo correccional, atribuida, si malno recuerdo, á los jueces de paz, actualmente.

Por el proyecto que se discute, los alcaldes y los jueces de paz no tienen absolutamente jurisdiccion, en lo criminal.

De manera que es preciso partir de la pena inferior, para ir al juzgado correccional, fuera de los casos en que la policia conoce, por disposiciones de otro orden.

Entonces, habría que suprimir tambien las palabras que establecen el mínimum, y dejar solamente el máximun.

Sería preciso decir: «*los jueces de lo correccional conocerán, en primera instancia, de los delitos en que la pena corporal ó la multa no pase de un año de prision ó de mil pesos, respectivamente.*»

**Sr. Posse**—¿Y por qué no poner el mínimum?

**Sr. Ruiz de los Llanos**—Y ¿á quién atribuye ese mínimum?

No lo atribuye á nadie, puesto que el proyecto en discusion quita toda jurisdiccion á los alcaldes y jueces de paz.

**Sr. Posse**—Las penas esas corresponden á la municipalidad ó á la policia.

**Sr. Ruiz de los Llanos**—Entiendo que nó.

La ley vigente atribuye á los jueces de paz cierta jurisdiccion, en lo criminal, que quita á los jueces en lo correccional. Ahora que no se atribuye á los jueces de paz sino una jurisdiccion civil y mercantil, es preciso dejar la totalidad de la jurisdiccion, en lo correccional, desde lo mas simple de la escala hasta los límites mas elevados.

**Sr. Posse**—Y ¿quién castiga las faltas, actualmente: un desórden, una borrachera? ¿Es el juez correccional ó la policia?

**Sr. Ruiz de los Llanos**—Estoy diciendo al señor diputado que los castiga el juez de paz.

**Sr. Posse**—En la actualidad, no los castiga el juez de paz, sino la policia.

**Sr. Ruiz de los Llanos**—Por eso pedia al señor diputado que me dijera si estoy equivocado: me parece que la ley vigente atribuye jurisdiccion correccional á los jueces de paz.

No la tengo presente. Si estuviese equivocado, me callaria la boca.

Precisamente porque atribuye jurisdiccion limitada al juez correccional, es que creo que la atribuye al juez de paz hasta el punto donde comienza la del juez correccional.

**Sr. Posse**—¿Quiére que este conozca por delitos cuyas penas sean uno, dos, tres, cuatro pesos de multa?

**Sr. Ruiz de los Llanos**—Repito que esos son delitos policiales.

**Sr. Posse**—Tengo la desgracia de no comprender al señor diputado.

**Sr. Ruiz de los Llanos**—Y yo tambien tengo la misma desgracia de no comprender al señor diputadol

Entiendo que en el código no hay una penalidad sujeta á la jurisdiccion del juzgado correccional que sea menor de un mes de prision ó menor que la multa establecida en el proyecto.

**Sr. Posse**—Tengo la desgracia de no comprenderle.

**Sr. Presidente**—Entonces ¿la comision no acepta?

**Sr. Posse**—Ya digo: tengo la desgracia de no comprender al señor diputado.

**Sr. Ruiz de los Llanos**—Entonces, pido que se vote por partes.

**Sr. Colombres**—¿Qué propone el señor diputadol

**Sr. Ruiz de los Llanos**—Que se diga: *los jueces en lo correccional, ó mas bien dicho, puesto que no hay mas que uno, el juez en lo correccional conocerá en primera instancia de los delitos en que la pena no exceda de un año de prision ó de mil pesos de multa.*

No necesitamos mas.

Esta limitacion de un mes de prision ó cien pesos de multa responde á la jurisdiccion atribuida, en la ley vigente, á los jueces de paz. Desde que el proyecto en discusion les quita esa jurisdiccion, tiene que atribuir á la jurisdiccion correccional todos los delitos que no sean meramente policiales.

**Sr. Posse**—Tengo siempre la desgracia de no comprender al señor diputadol

Creo que se dividen, en buena jurisprudencia criminal, las acciones menores que contravienen á la ley en faltas y delitos, y aun, segun la jurisprudencia de algunos países, todavia en crímenes. Yo no conozco delitos por los cuales se aplique la pena de dos pesos de multa.

Es necesario, pues, decir donde comienza la jurisdiccion correccional y donde acaba.

A juicio de la comision, debe comenzar donde dice el artículo y debe terminar donde tambien lo establece.

Así, una borrachera, un desórden, no son propiamente delitos, sino faltas, contravenciones policiales ó municipales que castigan



la policia y la municipalidad, llevando al ebrio que está dando gritos en la calle...

**Sr. Ruiz de los Llanos**—La municipalidad no es la que lo castiga.

**Sr. Colombres**—Ciertas faltas, sí.

**Sr. Ruiz de los Llanos**—Las que se cometen en su recinto. Como nosotros aquí.

**Sr. Posse**—Y ¿quién impone multas por falta de aseo, por arrojar á la calle agua servida, etc.?

**Sr. Ruiz de los Llanos**—Es por una facultad espresa que se le ha dado.

**Sr. Posse**—Pero, es claro! nadie ejerce funciones que la ley no le ha dado.

No viene á decirnos el señor diputado una novedad!

**Sr. Ruiz de los Llanos**—Tampoco nos dice el señor diputado ninguna, aunque lo que dice me parece contrario al sentido mismo del artículo.

Se habla de delitos en que la pena sea menor de un mes de prision...

**Sr. Posse**—No es el juez correccional.

**Sr. Ruiz de los Llanos**—De delitos en que conoce cualquier juez, y en que la pena no es mayor de un mes de prision ó de cien pesos de multa.

¿Quién conoce esos delitos?

Por la ley vigente, el juez de paz. Ahora, nadie.

**Sr. Posse**—Conoce la municipalidad.

**Sr. Ruiz de los Llanos**—No conoce.

No tiene ningun tribunal, la municipalidad, para conocer de esos delitos.

**Sr. Posse**—Entonces ¿el señor diputado quiere que el juez correccional conozca de faltas pasibles de dos pesos de multa?

**Sr. Ruiz de los Llanos**—Como nó! Siempre que no...

**Sr. Posse**—Ahora recién comprendo al señor diputado!

No acepto su reforma.

**Sr. Bermejo**—Podria agregarse: *salvo aquellas faltas ó contravenciones que, con arreglo á las leyes vigentes, correspondiesen á otra jurisdiccion.*

**Sr. Ruiz de los Llanos**—Cualquier cosa ménos lo que está establecido.

**Sr. Bermejo**—Porque, en efecto, el código penal impone penas menores de un mes de prision.

**Sr. Presidente**—Se vá á votar.

—Se lee la primera parte del artículo.

Los jueces de lo correccional conocerán en primera instancia de los delitos en que la pena corporal...

**Sr. Ruiz de los Llanos**—Pido la palabra.

Yo creo que el artículo está completo, que queda razonablemente ajustado á lo sancionado anteriormente y á la mente que ha tenido la comision, diciendo textualmente lo que propone: *los jueces correccionales conocerán en primera instancia de los delitos en que la pena no exceda de un año de prision ó de mil pesos de multa.* Nada mas, ni nada menos.

**Sr. Presidente**—Se votará por partes.

—Se vota la primera parte, hasta la palabra *pena*, y resulta afirmativa.

Se vota la siguiente parte: *corporal no exceda de un mes de duracion ó de multa de cien pesos*; y resulta negativa.

Se vota la misma cláusula, con las palabras *de mil* en lugar de *cien* y *de un año* en lugar de *un mes*, y es aprobada.

Se aceptan sin observacion los artículos siguientes hasta el 57 inclusive.

En discusion el 58.

**Sr. Carballido**—Pido la palabra.

Yo quisiera saber qué razones ha tenido la comision para suprimir esta última frase: *ó empleos judiciales.*

Actualmente, sucede que las secretarias de los jueces de primera instancia, como de las cámaras y de la Suprema Corte, están desempeñadas por abogados.

Entiendo que al desempeñar estas funciones, no ejercen propiamente su profesion de abogados, y creo tambien que seria violento comprender en la palabra *magistratura* estos empleos.

¿Qué razon se ha tenido entonces para eliminar á los que desempeñan estos empleos judiciales de la posibilidad de ser jueces de primera instancia?

**Sr. Colombres**—La comision creyó que habia una verdadera redundancia con esas palabras, porque creia que en las anteriores estaban comprendidos todos los casos.

La verdad es que la observacion del señor diputado me toma de sorpresa.

Por mi parte, no le haré oposicion.

**Sr. Carballido**—Las palabras suprimidas por la comision, no harán mal al artículo. Al contrario, quedará mas claro.

**Sr. Presidente**—¿La comision acepta que se restablezcan esas palabras?

Asentimiento.

**Sr. Figueroa (F. J.)**—Pido la palabra.

Voy hacer otra indicacion á la comision, y es que no creo que haya necesidad de exi-

gir treinta años de edad para ser juez. Yo propongo veinte y cinco.

—Se vota y aprueba el artículo tal como lo propone la comisión, con el agregado indicado por el señor diputado Carballido.

—Se continúa aceptando los artículos sucesivos hasta el 69 inclusive, después del cual, á invitación del señor presidente, pasa la cámara á cuarto intermedio.

—Vueltos á sus asientos los señores diputados, continúa la sesión.

**Sr. Ruiz de los Llanos**—Pido la palabra.

En el momento de pasar á cuarto intermedio, se me ha hecho notar que habia sido dado por sancionado el artículo 69, que me proponia impugnar, para sostener en su reemplazo el que está consignado en el impreso que fué repartido á todos los señores diputados, estableciendo cuatro cámaras de apelación en lugar de dos: dos para lo civil, una para lo comercial, y una para lo criminal y correccional, compuesta cada una de tres miembros.

No sé si es permitido volver á este debate sin hacer antes moción de reconsideración del artículo 69. Me inclino á creer que no. Recuerdo perfectamente que la práctica seguida por esta cámara siempre que se ha aceptado el temperamento de dar por sancionado todo artículo no observado, ha sido permitir que se reabra la discusión sobre un artículo, desde que no hubiese sido puesto en discusión el siguiente.

Si esta fuera también la mente de la cámara, entraré á impugnar el artículo 69 sin necesidad de reconsideración. Si así no fuera, tendria necesidad de hacer dicha moción.

**Sr. Presidente**—¿Hace indicación en algun sentido el señor diputado?

**Sr. Ruiz de los Llanos**—Para que la cámara resuelva, por una votación, si es permitido reabrir la discusión sobre el artículo 69, sin necesidad de reconsideración.

—Se vota esta indicación y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente**—Está nuevamente en discusión el artículo 69.

**Sr. Ruiz de los Llanos**—Pido la palabra.

Como he anunciado ya diversas veces, creo que este artículo debería ser reemplazado por el que he indicado.

Sostengo, señor presidente, la necesidad

de mayor número de cámaras, y aun la necesidad de que las cámaras de apelación se compongan de menor número de miembros.

Para justificar lo primero basta recordar á los señores diputados, y especialmente á los que siendo abogados han tenido ocasión de conocer nuestro foro y experimentar las dificultades que presenta la tramitación de los asuntos ante la justicia de la capital, basta recordar, digo, el excesivo recargo de la cámara de lo civil.

La cámara de lo civil necesita, he dicho ya y repito, descargarse de mas de la mitad de su trabajo.

Los señores miembros de la comisión de código que sostienen este despacho, han reconocido que la creación de los jueces de paz letrados, con jurisdicción hasta dos mil pesos en lo civil y mercantil, apenas le quitará un veinticinco por ciento de los asuntos.

Con esto no habremos conseguido nada; es preciso buscar un remedio mas eficaz; y ese remedio se encuentra perfectamente en la creación de dos cámaras en lo civil, en lugar de una, compuesta cada una de tres miembros, en lugar de cinco.

Es evidente que si se sanciona dos cámaras en lugar de una, han de hacer doble trabajo; y es evidente tambien que si, en lugar de componerse cada cámara de cinco miembros, se compone de tres, las resoluciones serán mas rápidas: no invierten el mismo tiempo en el estudio cinco miembros que tres, sobre todo, como se hace actualmente, turnándose para estudiar las causas sometidas á su despacho.

El único inconveniente que se ha opuesto á esta idea, la única objeción atendible que se me ha hecho, es que reduciéndose á tres el número de los miembros de las cámaras de apelación y siendo las resoluciones de estas inapelables, no hay para el litigante bastante garantía.

Yo creo que esta objeción no resiste un análisis meditado, sobre todo de parte de los que conocemos bien nuestro foro, nuestra magistratura. Para mí, lo declaro con toda convicción, existe la misma garantía en una sentencia pronunciada por tres miembros, que en una pronunciada por cinco.

Pero se dice: Si el tribunal se compone de tres miembros, basta el voto uniforme de dos para que haga sentencia; mientras que componiéndose de cinco se necesita el voto uniforme de tres.

Efectivamente es así. Pero me coloco en este mismo caso, y digo con la experiencia adquirida en el manejo de expedientes: ¿cuál sentencia tendrá mas autoridad, aquella que tenga á su favor dos votos contra uno, ó aquellos que tenga tres votos contra dos?

Y resuelvo, con plena conviccion tambien, que tiene mas autoridad, mas garantía de acierto, aquella que tenga dos votos contra uno, por la sencilla razon de que dos entres es mayor que tres en cinco.

Pero hay algo mas que observar.

La regla es que las sentencias de las cámaras de apelaciones sean dictadas por unanimidad de votos, y que en los pocos casos en que hay disidencia—porque son pocos, en realidad,—nunca es de un voto contra cuatro, sino de dos contra tres. Y entónces es perfectamente aplicable el razonamiento que hice anteriormente.

Esto, por lo que hace á la division de la cámara de lo civil, compuesta actualmente de cinco miembros, en dos cámaras, compuesta cada una de tres miembros.

Por lo que hace á la division de la cámara que conoce de los asuntos comerciales, criminales y correccionales, compuesta tambien de cinco miembros, me parece que hay otras razones.

Esta cámara, efectivamente, no está muy recargada, pero tampoco está tan holgada que pueda casi nunca expedirse dentro de los términos señalados por la ley para dictar sentencia.

Es, pues, conveniente disminuir el trabajo, y es sobre todo conveniente dividir la materia comercial de la criminal.

No se necesita las mismas aptitudes, los mismos conocimientos para ser camarista, miembro del alto tribunal en lo comercial, que para serlo en lo criminal.

Con la division que propongo, obtendríamos esta ventaja: tendríamos magistrados especiales, como deberían ser, en materia criminal, y magistrados especiales en materia comercial.

El señor presidente, que es abogado, y todos los señores diputados que lo son, saben perfectamente que en estas materias, comercial y criminal, todo lo que se haga en el sentido de alijerar el procedimiento, de abreviar los juicios, será bien hecho, será eficaz y acertado.

Las transacciones comerciales son operaciones rápidas, y los juicios á ellas relativas deben serlo tambien. Por consiguiente, facilitar la expedicion de los asuntos comerciales, es hacer algo bueno, algo acertado.

Del mismo modo, facilitar la expedicion de los asuntos criminales es todavía mas acertado, mas juicioso.

Hay algo de criticable en lo que sucede actualmente.

Tenemos cinco miembros que conocen de toda materia, comercial, criminal y correccional. De donde resulta que no tendremos absolutamente especialidades, ni se po-

drá dedicar á las causas criminales toda la atencion que merecen.

Constituida una cámara especial de lo comercial y correccional, esta no solo podría expedirse con la rapidez necesarias en estos juicios, sino que tambien podría atender mejor á la superintendencia atribuida por la ley respecto á los empleados inferiores, á las visitas de cárceles, y al desempeño de otras funciones anexas al cargo, que no pueden actualmente hacerse con la frecuencia que sería de desear.

He comunicado este pensamiento á muchos miembros de las cámaras de apelaciones, y puedo asegurar que en las de lo criminal y comercial tiene aceptacion. Ellos creen que es sumamente conveniente en todo sentido, sobre todo para el acierto de las decisiones superiores, separar las materias comerciales de las criminales.

Podría hasta dar nombres propios de los señores camaristas que creen que es sumamente acertado el pensamiento, y que creen que la justicia estaría perfectamente garantida con tribunales de tres miembros, como lo está con los de cinco.

En nombre de estos razonamientos, que, alguna vez, ántes de ahora, he espuesto en parte, propongo, en lugar del artículo que observo, que se diga lo que dice el impreso que se ha repartido á los señores diputados: «Habrá cuatro cámaras de apelaciones: dos en materia civil, una en materia comercial y otra en materia criminal y correccional».

Mi proyecto impreso responde tambien á todas las demás modificaciones que sería necesario hacer en los artículos siguientes.

Las leeré llegado el momento, si prevaleciere la idea que acabo de proponer.

**Sr. Colombres**—Pido la palabra.

Diré muy poco para fundar el dictámen de la comision.

El pensamiento de establecer una doble cámara de lo civil, sean ellas de tres ó de cinco miembros, no es nuevo, y ha venido ya á esta cámara con el descrédito de la derrota. En el honorable senado fué rechazado el año anterior.

Es sabido que en el proyecto del honorable senado se establecía únicamente la justicia de paz letrada en primera instancia, con jurisdiccion tan solo en asuntos que no excedieran de mil pesos; y á pesar de esto, consideró aquella cámara, que con esta sola innovacion se quitaba bastante trabajo á los jueces superiores, de manera á hacer innecesaria la creacion de una doble cámara de lo civil.

Ahora, si nosotros, no solamente hemos hecho eso, sino que además descentralizando la justicia, hemos creado cámaras de paz y hemos estendido su jurisdiccion

hasta asuntos dos mil pesos, no me parece que podemos sostener la necesidad de crear una nueva cámara en lo civil, cuando es mucho mayor el trabajo que se disminuye á los jueces superiores.

Pero hay otra consideracion que el señor diputado no ha tomado en cuenta, y es que con la creacion de una nueva cámara en lo civil, vamos á tener el hecho chocante de la disparidad de jurisprudencia contemporánea: una cámara fallará una cuestion de derecho en un sentido, y al dia siguiente, tal vez el mismo dia, la otra fallará la misma cuestion en sentido contrario. Vamos á tener dos tribunales superiores coexistiendo, con las mismas atribuciones, y fallando en última instancia de distinto modo.

Esto me parece que produciria el caos y que importaria establecer hasta la anarquía judicial, haciendo desesparar de la justicia misma.

Por otra parte, el señor diputado no dá importancia á esto de que sean tres ó cinco los miembros del tribunal.

Sin embargo, para mí es una cuestion fundamental, y la prueba de ello la tenemos, señor presidente, en que hasta en los mas apatados rincones de la república, se está reaccionando en la actualidad contra los tribunales de tres miembros, que son una verdadera calamidad.

Me bastará recordar en apoyo de este aserto todas las constituciones que se han reformado últimamente en las provincias, en las que se ha establecido, en vez de los viejos tribunales compuestos de tres miembros, tribunales de cinco, porque en todos aquellos tribunales sabemos lo que pasa: al fin es la voluntad del presidente la que prevalece, con lo que se destruye toda la garantía buscada para los litigantes.

Con el proyecto del señor diputado vamos pues, á hacer retroceder á la capital de la república, colocándola en la situacion en que no quieren encontrarse ni aún las provincias mas pobres y lejanas que reforman al presente sus instituciones.

Pero, en este punto, como en todos los demás de su proyecto, la comision no ha procedido arbitrariamente; ha procedido teniendo á la vista datos estadísticos.

Es sabido que la cámara de apelaciones en lo civil no ha funcionado siempre con regularidad. Quizá el año que con mas regularidad ha funcionado es el año 83. Y tengo á la mano los siguientes datos estadísticos.

En el año 83 la cámara tenia 649 expedientes y entraron 902, lo que hace un total de 1551.

Ese año se resolvieron, segun la memoria que pasó en oportunidad la cámara al

ministerio, 165 definitivas, 627 interlocutorias, ó sea un total de 792.

En el año 84 hubo una existencia de 542 expedientes y entraron 823, lo que dá un total de 1,365 expedientes entre definitivos é interlocutorios; de los cuales fueron despachados 604 y en la actualidad tiene 888 expedientes, de los que, por la nueva organizacion pasarán á la justicia de paz 212, quedando, por consiguiente, 676 expedientes á despacharse, es decir, 116 expedientes menos que el total de los despachados en 1883, que como he dicho, fué el más laborioso, y 72 mas que el total de los fallados en el año 1884, que fué un año anormal porque renunciaron los doctores Posse é Ibarguren y porque sufrió una larga indisposicion el vocal de dicha cámara, doctor Pardo.

Por consiguiente, aparte de las otras consideraciones que he aducido, creo firmemente que no debe aceptarse el pensamiento del señor diputado por Salta, porque la cámara en lo civil tendrá el medio de ponerse al dia.

Yo tambien me he puesto en contacto con algunos miembros muy allegados á la cámara de lo civil, y sé lo que pasa en ella. Sé que por mucha que sea la laboriosidad de los miembros de dicha cámara, hay tambien mucho desórden en la manera de estudiar los asuntos. Sé que falta en ella un espíritu ordenador, que clasifique los expedientes; y sé tambien, que poniendo en órden los asuntos, clasificando los expedientes, poniendo á un lado los rezagados, aquellos que no hay quien se ocupe de ellos, y atendiéndose exclusivamente los activos, la cámara podria, en menos de un año, ponerse al dia.

Por consiguiente, no es con una nueva cámara que se van á remediar los males, sino procurando un espíritu de iniciativa, en el sentido de ordenar el trabajo, que por el momento falta en aquel cuerpo.

Todo esto que digo es sin pretender, en lo mas mínimo, afectar á los miembros de la cámara de lo civil, cuya consagracion al lleno de sus deberes no tengo motivos para poner en duda.

No tengo mas que agregar por el momento.

**Sr. Ruiz de los Llanos**—Pido la palabra.

No me parece pueda decirse que seria desdoroso para la capital de la república tener tribunales de apelacion compuestos solo de tres miembros, cuando los tiene la primera provincia argentina, la de Buenos Aires.

La cámara de apelaciones de la provincia de Buenos Aires se compone de tres miembros.

**Sr. Colombres**—Pero hay una corte suprema que no tiene la capital.

**Sr. Ruiz de los Llanos**—Hay una corte suprema, dice el señor diputado. Es cierto; pero en la mayor parte de los casos concluyen los asuntos en ese tribunal de apelaciones, perfectamente honorable, perfectamente apto, y perfectamente garantizado, diré así, de la aplicación de la justicia.

Pero he tenido otra circunstancia en cuenta: he creído que estas cámaras de apelación, que son indudablemente inferiores a la suprema corte nacional, deberían por su número, estar también en condiciones proporcionadas.

Si la suprema corte no cuenta sino con cinco miembros, me parece que el tribunal de apelaciones de la capital bien puede tener un número menor.

¿Por qué? Por esta circunstancia: porque dada la organización de los tribunales de la capital, para las sentencias definitivas, por regla general y casi absoluta, es necesario que conozcan los cinco miembros; mientras que, dada la organización de la ley que rige en la justicia federal, propiamente dicha, bastan tres miembros de la suprema corte para hacer tribunal y para fallar.

De manera que en este alto tribunal, en este supremo tribunal, muchas veces no hay sino tres miembros; y en muchos casos, como dije antes, dos votos, correspondientes a otros tantos miembros del tribunal, hacen cosa juzgada contra muchos votos pronunciados por jueces inferiores, cuando se trata de asuntos que han ido ante la corte suprema, después de recorrer las tres instancias (cosa que sucede con frecuencia) que hay en la administración de justicia provincial en ciertos casos.

No discuto absolutamente, no pongo en duda de ninguna manera, la exactitud de los datos estadísticos que acaba de presentar el señor diputado por Tucuman, miembro informante de la comisión; pero, a mi vez, creo que se me ha de creer, porque todos los señores diputados que me escuchan lo saben por experiencia propia, que actualmente la cámara de lo civil está con exceso atrasada: a tal punto, que si no hay consideración especial a un litigante ó al abogado que lo patrocina, la sentencia definitiva no sale sino después de años de llamados autos para sentencia.

Hay esto que es fenomenal, diré así: en las diversas causas de alguna importancia en que hay informes *in voce*, apesar de que estos deben ser pronunciados después que se han estudiados los autos por la cámara, sucede que se pronuncian, y tarda todavía la sentencia uno, dos, tres y hasta cuatro años, cuando ya no existe ni recuerdo de la esposición

oral que se hizo, la cual queda, por lo tanto, completamente perdida.

Por el sistema que propongo yo, no sucedaría eso.

El señor diputado reconoce que hay desorden, desorganización en la actual cámara de lo civil.

Esto solo bastaría para acceder a mi indicación.

Si son inamovibles los jueces, si no podemos hacer que pongan orden, si al mismo tiempo son laboriosos, como él lo reconoce, es indispensable buscar el medio de aligerar, de hacer fácil la expedición en los asuntos.

**Sr. Colombres**—Hay muchos que estudian con desorden.

**Sr. Ruiz de los Llanos**—Iba a agregar esto: en los años 1883 y 1884, ó hablaré mas concretamente, de los años en que formaban parte de la cámara en lo civil el actual señor diputado doctor Posse y el hoy miembro de la suprema corte doctor Ibarguren, ese tribunal trabajaba mucho. Me consta que algunos de sus miembros trabajaban de día y de noche, y desde muy temprano. Varias veces a las 9 de la mañana he encontrado al mismo doctor Posse estudiando expedientes y proyectando sentencias y he encontrado también al doctor Ibarguren sobre los expedientes, trabajando sin descanso.

Pero pregunto: ¿se puede imponer una carga tan pesada a los miembros de este tribunal? Me parece que no.

Esto hace mucho honor, sin duda, al señor diputado doctor Posse y al señor doctor Ibarguren, pero no es posible imponer a los magistrados una carga tan superior a las fuerzas humanas, para ser sobrellevada durante muchos años.

Me consta que ellos sobrellevaron ese trabajo porque querían ponerse al día, porque querían sacudir esa montaña de expedientes; pero no lo pudieron conseguir, y tuvieron que sucumbir en la demanda.

Esa montaña de expedientes, desde que han salido esos señores camaristas, ha continuado creciendo.

Es preciso, pues, buscar un remedio, mas eficaz.

Si a los jueces de primera instancia se les ha descargado diré así, un cincuenta por ciento de su trabajo con este proyecto, es preciso también, cuando menos, hacer lo mismo con las cámaras, y no se hace lo mismo con estas, dejándolas compuestas como están actualmente y con cinco miembros.

No dirá mas.

**Sr. Posse**—Pido la palabra.

Voy a ser breve en la esposición de los

motivos que han aconsejado á la comision á sostener este artículo.

El señor diputado por Salta funda la modificación que propone, primero en la necesidad de aliviar mas á los tribunales superiores, para que puedan ponerse al día en su despacho, alegando que no hay ningún inconveniente en reducir á tres el número de los miembros de estos tribunales superiores, porque tanta garantía de acierto hay en un tribunal de cinco como de tres miembros.

Creo fácil demostrar, que con las reformas que se han hecho á la ley orgánica de los tribunales, las dos cámaras, tanto la civil como la de lo comercial, quedan en condiciones de hacer un pronto despacho, tan pronto como puede desearse la impaciencia de los litigantes.

Comenzaré á hacer el exámen por la cámara de lo comercial.

Esta cámara hace mas de dos años que está al día; por consiguiente, no necesita que se le quite el peso que sobre ella gravita, desde que lo sobrelleva bien.

Este dato lo tengo de los mismos señores que componen el tribunal; lo tengo del fiscal del estado; y me consta, además, por el hecho de haber pertenecido á la cámara de lo civil, y estar, por esta circunstancia, en contacto diario con los miembros que la forman.

Entonces ¿para qué haríamos de esa cámara dos, reduciendo su personal?

¿Cuál es el verdadero interés público, el interés legítimo que con esto se conseguiría?

Nos decía el señor diputado como única razón: «para hacer especialistas.»

Lo mismo se harán especialistas los que están en la cámara de lo criminal y de lo comercial.

Además, no es una razón de bastante seriedad, para que se haga una alteración en la composición de esos tribunales, sin responder á ningún objeto serio, porque, como he dicho, esta cámara, como está compuesta actualmente, está al día en el despacho.

**Sr. Ruiz de los Llanos**—No precisamente al día.

**Sr. Posse**—Al día, señor; no retiro la palabra.

**Sr. Ruiz de los Llanos**—Nunca se espiden las sentencias en los términos de la ley.

**Sr. Posse**—Un tribunal que está al día, no quiere decir que, después de haber proveído «autos» para sentencia, la dé.

**Sr. Ruiz de los Llanos**—Nunca se espide en los términos señalados en la ley de procedimientos, para sentencia definitiva.

Por consiguiente, no está al día.

**Sr. Posse**—Está al día.

**Sr. Ruiz de los Llanos**—Yo puedo señalarle causas en que intervengo....

**Sr. Posse**—El señor diputado señalaba otro dato, que lo único que prueba, es un cargo contra los miembros de la cámara de lo civil.

El señor diputado nos decía que, en causas en que es abogado, después de informar él *in voce*, han sido falladas en cuatro años.

Puede ser esto cierto; pero ello no probaría sino la falta de su deber por parte de los miembros de esta cámara, porque ellos no han debido escuchar un informe *in voce* sin haber estudiado el expediente, porque lo demás es oír un cuento sobre un asunto que no se conoce, y del que no queda nada en la memoria.

**Sr. Ruiz de los Llanos**—Sin embargo, ha sucedido.

**Sr. Posse**—Si ha sucedido, quiere decir que no han sabido cumplir con su deber los miembros de esa cámara.

Yo puedo, por el contrario, citar al señor diputado muchos casos de causas que se han resuelto apenas concluida la audiencia.

**Sr. Ruiz de los Llanos**—Es muy difícil eso.

**Sr. Posse**—Me cabe la satisfacción de vindicar todo el honor que merecen las personas que forman, tanto el tribunal de lo civil, como el de lo comercial.

Son trabajadores, hombres de gran carácter, de una probidad acrisolada, como es difícil encontrar quienes los superen.

El antecedente que el señor diputado citaba, solo probaría que estos señores no han sabido cumplir con su deber, porque han reducido el informe *in voce* á una mera formalidad, desde que á ser exacto lo que el señor diputado dice, escucharon el informe en un asunto que no conocían.

Pero esto no ha sucedido en el tiempo que he tenido el honor de pertenecer á esa cámara.

Vuelvo á mi argumentación.

Se reconoce por el señor diputado, como no puede dejarse de reconocer, que por el establecimiento de la justicia de paz con jurisdicción hasta dos mil pesos, se disminuye en un veinte y cinco por ciento el trabajo de las cámaras superiores, en lo civil y comercial; no en lo criminal, puesto que los jueces de paz no van á ejercer esta clase de jurisdicción.

La cámara de lo comercial que propone el señor diputado, va á ejercer solo jurisdicción en lo comercial, no en lo criminal ni en lo correccional.

Por este solo hecho, el trabajo de estos jueces queda reducido cuando mucho á un

veinte por ciento del que actualmente tiene esa cámara.

Porque en esa proporcion están las causas criminales y correccionales, con las comerciales.

Si todavía se quita un veinite y cinco por ciento de estas causas comerciales, vamos á crear canónigos jubilados, con el título de miembros de la cámara de lo comercial.

**Sr. Ruiz de los Llanos**—Seríamos consecuentes con la creacion de los canónigos jueces de paz.

**Sr. Posse**—Es un cargo á la cámara.

No es ya mia esa opinion, sino de la cámara, que sancionó que eran necesarios catorce jueces de paz.

Y me parece que la opinion de la cámara es algo mas respetable que la del señor diputado.

No veo, pues, á qué viene con ese cargo.

**Sr. Ruiz de los Llanos**—Si yo no me levanto contra la sancion de la cámara.

**Sr. Posse**—Señor presidente: vá á crearse tres canónigos jubilados que no van á tener que hacer nada, como lo he demostrado con datos estadísticos claros; porque, como lo he dicho y lo repito, á riesgo de fatigar á la cámara, para que no se interrumpa la hilacion de mi discurso, que á cada momento me lo interrumpe el señor diputado por Salta, no sé con que propósito;—porque, como ya lo he dicho, las causas criminales y correccionales están en la relacion de 80 á 20 sobre las comerciales.

Esto es lo que vá á tener que hacer esa cámara.

De esas veinte causas todavía háy que rebajar el veinte y cinco por ciento, que van á ser falladas por los jueces de paz.

Entónces, ¿á qué queda reducido el quehacer de las cámaras de lo comercial que nos propone el señor diputado?

Y, para obtener esta ventaja enteramente personal para los que ocupan esas posiciones, quiere el señor diputado quitar la garantía de acierto que actualmente hay en una cámara compuesta de cinco miembros, para causas criminales en las que vá el honor y la vida de los hombres, y su libertad, mas preciosa que la vida misma?

¿Estas son las ventajas que vamos á conseguir?

Pero el señor diputado concreta su argumentacion á la cámara de lo civil y dice que esa cámara no puede moverse, que está agobiada por el peso de trabajo que gravita sobre ella.

Yo he pertenecido á ese tribunal; no me creo superior á nadie; al contrario, reconozco mi inferioridad con respecto á muchos; pero, sin embargo, creo firmemente, por los an-

tecedentes, por los datos y por el conocimiento personal que de las cosas he adquirido en dos años y medio que he pertenecido á ese tribunal, que basta y sobra la reforma que se ha hecho, para que esa cámara se ponga al día, si sus miembros quieren trabajar.

La demostracion puede fácilmente hacerse; la he hecho ya en sesiones anteriores. Los datos que la misma memoria de esa cámara nos suministra, prueban que de los espedientes que entran en el año al despacho ordinario, quedan un saldo de cien. Pero, como nosotros le disminuimos un veinte y cinco por ciento de trabajo, va á resultar que va á tener un saldo menor de trabajo.

Estos son datos claros, concretos, definidos.

Ademas, señor presidente, el plan de reformas de la comision, para alivianar á las cámaras, no termina en el proyecto que se discute. Ella tiene á su estudio un proyecto de código de procedimientos en materia civil, y es fuera de discusion que con ese código puede descargarse á esa cámara de apelaciones en un cuarenta ó cincuenta por ciento de interlocutorias, interlocutorias engorrosas que demandan tiempo, como son, por ejemplo, las regulaciones.

Aquí, en Buenos Aires, hay el vicio de las apelaciones. Por desgracia el código de procedimientos, que tiene muchas cosas buenas, tiene tambien muchas cosas malas: facilita de una manera espantosa las apelaciones, favoreciendo así todos los propósitos del mal litigante, del deudor tramposo.

Oh! señor; yo podría referir á la cámara casos gráficos, típicos. He tenido que resolver apelaciones por regulaciones hasta de doce pesos! no una vez, muchas.

Se ha apelado, por ejemplo, de un juicio ejecutivo en que se trataba de unas drogas que se estaban perdiendo.

El depositario lo hizo saber al juez; el juez llamó á una audiencia al demandante, que estaba interesado en que las drogas no se perdieran; al ejecutado, que estaba interesado en que las drogas se conservasen, y á un tercero que sostenia que las drogas eran suyas, y que estaba él tambien, por consiguiente, interesado en que no se perdieran.

Sin embargo, uno de ellos apeló de la providencia del juez llamando á audiencia para que tomasen medidas conservadoras para salvar la mercaderia á que todos creian tener derecho!

Yo he resuelto el caso.

Bien, pues; este es el propósito de la comision: completar estas reformas poniendo facilidades para el despacho diario de los tribunales. ¿Cómo? Estableciendo diversas maneras de hacer la regulacion de los ho-

norarios, por lo menos en cuestiones de cierta cantidad, para que no se vaya á distraer, por quince ó veinte pesos, la atención de un tribunal. Porque, al fin y al cabo, hay que estudiar los autos, para ver si los honorarios son legítimamente ganados, si son equitativos ó no, y todo esto invierte tiempo, que no debe gastar un tribunal superior en semejantes menudencias.

Tenemos el código actual de procedimientos que dá acciones, cuando su misión única es reglamentarlas, ponerlas en ejercicio, determinar los medios como se han de ejercitar ante los jueces.

Varias acciones dá el código actual de procedimientos en lo civil; por ejemplo, en un caso, dá la acción de jactancia; en otra parte, crea acciones rescisorias. Y con este motivo, en dos años y medio que he estado en la cámara de lo civil, hemos resuelto mas de doce pleitos, por la acción rescisoria.

He tenido también ocasión de ver interrumpido el término de prueba por apelaciones, con grave perjuicio de los litigantes y de la justicia.

Todo esto es muy fácil remediarlo. Lo que hay, es que la comisión de códigos no puede hacer todo á la vez.

Lo que hay, también, es que la cámara haría muy bien en crear dos comisiones de códigos, porque una sola no puede soportar ese peso, por mas laboriosa que sea, por mas tiempo que consagre al trabajo; esta es la verdad.

Ahora ¿qué se consulta, con crear tribunales de tres miembros, en vez de cinco?

¿Se puede sostener que hay igual acierto, en tres, que en cinco?

Me parece que no puede sostener el señor diputado esa tesis.

Yo no voy á hacer el argumento de que algunas veces los unos están por la afirmativa y los otros por la negativa.

No, señor, la mayor garantía que puede ofrecer un tribunal consiste en eso. Cuánto mayor es el número de las personas que estudian un expediente, mayor es la garantía de acierto; son mas variadas las impresiones, es mas amplia la discusión entre el mayor número, y producen mas luz, porque cuanto mayor es el frotamiento, mayor es la luz que se proyecta.

Entonces, vendríamos á disminuir la mayor garantía que hoy dá la administración de justicia al público.

¿Para qué? ¿Para que no tenga tanto qué hacer? Se ha demostrado, y el señor diputado lo ha reconocido, que, por la reforma que se ha hecho en la justicia de paz, la cámara en lo civil se descarta de un veinticinco por ciento...

Lo ha dicho el señor diputado, y, si no lo ha dicho, no por eso es menos cierto.

**Sr. Ruiz de los Llanos**—No he interrumpido al señor diputado.

**Sr. Posse**—No he dicho que me haya interrumpido.

**Sr. Ruiz de los Llanos**—No he dicho nada.

**Sr. Posse**—Si no lo ha dicho ahora, lo ha dicho antes.

**Sr. Ruiz de los Llanos**—Es que me parecía que el señor diputado creía que le había interrumpido.

**Sr. Posse**—De manera que, de cien expedientes, se le descarta veinticinco, por la reforma en la justicia de paz; le quedan setenta y cinco.

Si esta cámara es aumentada con otra, quedaría la actual con treinta y siete y medio es decir, la tercera parte del trabajo que ahora tiene que sería también mas liviano, porque se reduce la tramitación.

Yo creo que no hay ninguna necesidad, ninguna conveniencia en crear otra cámara en lo civil, y, sí, graves inconvenientes en reducir á tres los miembros de las cámaras superiores.

Ha dicho, y con mucha razón, el señor miembro informante de la comisión: crear tribunales superiores iguales en jurisdicción, es crear la anarquía judicial, es algo parecido á tener dos congresos, á tener dos presidentes de la república.

Poner dos cámaras con igual jurisdicción, sin que la una tenga superioridad sobre la otra, es el gobierno alternativo de la justicia, es establecer la anarquía, la mas perfecta y completa anarquía.

Estas son las consecuencias á que el señor diputado por Salta trata de llevarnos.

Y debo decir que, apercibiéndome yo del recargo de los tribunales y de la necesidad de buscar una solución que permitiese dar facilidades al despacho, fui quizás el primero que indiqué al señor ministro de justicia, la creación de estas cámaras que propone el señor diputado, encontrándome en casa de un pariente mío, de un modo casual, con el doctor Wilde.

Pero, mas tarde, meditando madurando el pensamiento, lo deseché como sumamente perjudicial.

Y repito, con el conocimiento que tengo por haber servido dos años y medio en la cámara de lo civil, con la reforma que la cámara de diputados ha sancionado, ese tribunal puede ponerse con toda facilidad al día. Y creo que se pondrá al día, porque hay que reconocer la laboriosidad de los miembros que lo componen.

He dicho.

**Sr. Presidente**—Si no se pide la pala-



bra, pondré á votacion el artículo propuesto por la comision...

Se votará.

—Se vota si se acepta el artículo en discusion, y resulta afirmativa de 37 votos contra 15.

—El artículo 71, es aprobado sin observacion.

— En discusion el artículo 72.

**Sr. Estrada**—Pido la palabra.

Ruego á la honorable cámara que consienta en la votacion por partes del artículo que entra en debate, porque convicciones profundísimas é imperiosos deberes de conciencia, me obligan á votar en contra del segundo inciso, en el cual se propone, como una de las materias de competencia de las cámaras de apelacion, entender en los recursos de fuerza.

La comision de códigos no ha precisado el sentido en el cual toma esta palabra. Pero, como quiera que ella sea, de todas maneras, los recursos de fuerza, considerados en la generalidad del concepto que abarca la palabra empleada por los señores de la comision, envuelven un derecho de apelacion de los tribunales eclesiásticos, sobre resoluciones eclesiásticas, para ante los tribunales seculares.

Una apelacion es la provocacion de una causa, de un juez inferior á un juez superior.

Para poder establecer la legitimidad de este recurso de fuerza, seria necesario poder demostrar que los tribunales seculares son tribunales superiores respecto de los tribunales eclesiásticos.

Si la Iglesia es, por su divina institucion, una sociedad perfecta, es evidente que, por ello, tiene una facultad soberana de legislacion propia; y como es una sociedad visible, es evidente tambien que debe estar investida de todos los poderes que son necesarios para hacer efectiva su propia legislacion. Quiere decir que en el carácter esencial de la Iglesia, se sigue su potestad legislativa y su jurisdiccion en el foro exterior.

Nuestra legislacion, como la de todos los países cristianos, ha reconocido (y no podia menos de reconocer) este carácter inherente á la existencia y modo de ser de la Iglesia.

Por esa razon es que reconoce la competencia de los tribunales eclesiásticos.

Si los tribunales seculares son incompetentes por su propia naturaleza, para resolver por sí mismos, en una instancia ó grado, aquellos asuntos que pertenecen á la legislacion eclesiástica y á la jurisdiccion eclesiástica, es evidente que lo serán tambien

segunda apelacion y en cualquier grado.

Aunque se consideren, (como han sabido considerarlos algunos publicistas partidarios de las regalías) estos recursos de fuerza, como un medio de corregir erróneos procedimientos de los tribunales eclesiásticos, podrian refutarse de la misma manera.

¿Sobre qué principio se podría sostener que los tribunales seculares son mas aptos que los eclesiásticos para organizar los procedimientos y la marcha que los juicios deben tener, segun las leyes de la Iglesia?

Y no se diga que corresponde á las protestades seculares un derecho de proteccion sobre los súbditos, que puede hacerse extensivo hasta la facultad de ampararlos contra estos procedimientos que se llaman irregulares por parte de los tribunales de la Iglesia. Es verdad que los estados ejercen este derecho de proteccion sobre sus súbditos; pero los ejercen respecto de cualquier atentado de que pudieran ser víctimas por parte de poderes estraños. No siendo la Iglesia un poder estraño, puesto que todos los hombres, por la profesion de la fé, se constituyen en súbditos suyos, es evidente que el estado no encontrará, en ningun caso, oportunidad para ejercer este derecho de proteccion.

Yo no conozco ninguna legislacion civil, ninguna legislacion de los estados que rija el procedimiento de los tribunales seculares, en la cual los derechos de las personas y la regularidad del juicio estén garantidos con la seriedad y eficacia que lo están por el derecho canónico.

Los tribunales eclesiásticos tienen una gerarquía; los tribunales eclesiásticos están sujetos á una obligacion dentro de la cual pueden encontrar rectificacion de cualquier error, aquellos individuos que se consideran, en algunos casos, perjudicados por ellos.

¿Por qué buscar, entónces, en un poder estraño, en un poder incompetente, por su naturaleza, para rectificar estos errores, la facultad que envuelve el recurso de fuerza?

Bajo este nombre de recurso de proteccion, se ha entendido tambien una facultad que han solido verificar los gobiernos seculares para proteger la observancia de los cánones, y, principalmente, segun decian los regalistas españoles, para ejercer la proteccion del Concilio de Trento.

Es verdaderamente peregrino el concepto de los que atribuyen á la proteccion secular, mayor celo, mayor inteligencia, mayor idoneidad para proteger la existencia y la eficacia de las leyes de la Iglesia, que á los tribunales que, en uso de su propia é inherente soberanía, la misma Iglesia crea y organiza.

Estos recursos de fuerza envuelven, cuando se les considera atentamente, verdaderos y visibles absurdos.

Los publicistas los han dividido en diversas categorías.

Han llamado á una de las formas que suele tomar *recurso de fuerza de no otorgar*; y por él se atribuye á los tribunales seculares, la facultad de obligar á los jueces eclesiásticos á otorgar apelaciones que ellos, en alguna oportunidad, hayan creído deber no conceder. Esto es un acto de usurpacion del Estado sobre la Iglesia, es arrogarse la facultad, como manifesté hace un momento, de interpretar mejor que los tribunales, las leyes de la misma Iglesia.

Otra de sus formas, es la llamada *recurso de fuerza por la manera de conocer*, asimilable á la que acabo de indicar, herido de los mismos defectos, y en el cual la absurdidad resulta no menos clara que en aquel.

Por último, viene *el recurso de fuerza en conocer*.

El recurso de fuerza en conocer importa llevar ante la jurisdiccion secular una cuestion de competencia de los tribunales eclesiásticos, establecer en las leyes que los tribunales seculares tienen la facultad de resolver toda competencia de jurisdiccion entre ellos y los tribunales eclesiásticos. Es dar por resuelto precisamente lo que está en problema, es dar por resuelta la superioridad de esos tribunales sobre los tribunales eclesiásticos ó, de otra manera, la superioridad soberana del estado sobre la Iglesia, concepto radicalmente opuesto al espíritu cristiano.

Por otra parte, el recurso de fuerza no pertenece á nuestro derecho: ni á nuestro derecho actual, ni á nuestro derecho tradicional.

El está tomado de la antigua legislacion hispano-americana y de la propia y esclusiva de España.

Pero envuelve una cuestion capital de derecho público eclesiástico que, en ningun caso, ha podido ser establecido como se define el derecho público eclesiástico, es decir, por concordato entre el Estado y la Iglesia.

Y ¿ha consentido la Iglesia, en alguna época, por algun concordato ó por algun privilegio á España ó á cualquier otro estado de la cristiandad, la facultad de establecer esta superioridad de los tribunales seculares sobre los tribunales eclesiásticos? Está la historia para responder.

No es tampoco una derivacion del derecho de patronato, legítimamente establecido en España y en Indias á favor de los reyes españoles.

No lo es, porque aquel — el derecho de

patronato — es un privilegio, una proteccion sobre la Iglesia, y esto es un privilegio que se abroga el estado para subyugar á la Iglesia. Pertenecer á la parte abusiva, á la parte caprichosa, á la parte despóticamente añadida á la regalia por los reyes de España. Y basta tomar en consideracion la historia, el origen, y el desarrollo de esta facultad del Estado para apreciarla bajo el punto de vista en que me he colocado.

El recurso de fuerza bajo el nombre de apelacion *ab abuso*, tuvo su origen en Francia.

Primitivamente tomó una forma tímida; se le presentaba como un medio transitorio, como un expediente para conducir de los tribunales eclesiásticos ante el soberano pontífice, las querrelas que contra actos de los jueces eclesiásticos locales tuviera que establecer un particular.

Los reyes de Francia, á medida que fueron adsorbiendo la justicia real, la justicia señorial, y todas las juridicciones particulares, á medida que fueron adsorbiendo todos los poderes políticos y todas las libertades, al extremo de poder decir por boca de Luis XIV: «El estado soy yo,» convirtieron aquel papel intermediario que habían asumido, en un papel abusivo, absurdo, de superiores en nombre del Estado, sobre la Iglesia, sobre los tribunales eclesiásticos.

Ya se había introducido en España, con formas mas ó menos tímida y encubiertas, como en Francia, esta pretension de los tribunales civiles, es decir, esta pretension real, porque tras de los tribunales civiles estaba la corona, bajo la dinastía de Austria.

Pero cuando penetró en España la dinastía de Borbon, llevando consigo todas las tradiciones y pretensiones francesas, llevando consigo todos los absurdos de la política francesa; cuando comenzó á desarrollar aquel poder despótico que sacrificó paulatinamente todas las libertades comunales de España, todas sus antiguas y gloriosas libertades provinciales, en una palabra, todo lo que constituía la antigua y hermosa vida de libertad de la península española; cuando llegaron al absolutismo completo, cuando llegaron á hacer un gobierno típico de despotismo y de absorcion; entonces tambien cayeron en el tremendo error de pretender absorber la Iglesia, porque absorber la jurisdiccion de la Iglesia por medio del recurso de fuerza, es una cosa muy próxima á la pretension de absorber su potestad legislativa y su potestad doctrinaria.

Todos esos reyes han estado próximos al cisma; y donde estas doctrinas han llegado á desenvolverse mas, se ha llegado, mas que al cisma, á la heregía; y en todos los países en los cuales, despues de la llamada reforma

protestante del siglo XVI, los gobiernos se han separado del gremio de la Iglesia, en todos ellos el poder espiritual ha sido absorbido por el poder político, y se ha tendido á restablecer la forma verdaderamente horrosa de la sociabilidad pagana.

Por esta razon, la Iglesia ha protestado continuamente, como contraria al dogma de su independencia, como contraria al dogma de su soberanía, contra esta facultad del Estado, contra esta facultad del recurso de fuerza.

Desde que esa pretension ha aparecido en los estados modernos, dos concilios ecuménicos se han reunido: el de Trento y el del Vaticano. En los dos, en términos mas ó menos directos, pero claros, evidentes é intergiversables, está condenado el derecho de recurso de fuerza.

Las constituciones de los pontífices, sus documentos, determinan desde entónces, desde la bula de la Cena, espedita por Martino IV en 1420, pasando despues por los documentos no menos solemnes espeditos por Pio IX, determina, digo, como un atentado contra la soberanía de la Iglesia, como, un atentado contra su independencia, contra el dogma fundamental de su ser visible este abuso del estado.

No puedo yo, por consiguiente, señor presidente, prestar mi adhesion á este proyecto de la comision.

Yo entiendo que el congreso de la república argentina, puesto á la cabeza de un país católico, debe borrar de la legislacion, hasta la última reliquia de estas malas y viciosas doctrinas que pugnan contra los principios esenciales en que reposa nuestro sistema de gobierno, y en los cuales tambien deben reposar los fundamentos mismos de la sociabilidad cristiana.

Pienso que este congreso, colocado á la cabeza de una sociedad republicana y libre, debe borrar hasta el último vestigio en la cual se mantenga vivo el espíritu despótico de los reyes absolutos de España. Y pienso que no pondrá bajo mejor y mas poderosa égida las instituciones libres de la república, que poniéndolas al amparo de esta doctrina de la independencia de la Iglesia y del Estado y del respecto á la soberanía de la Iglesia, sobre la cual reposa la civilizacion moderna, defendiendo la cual la Iglesia ha sostenido el principio esencial de la libertad con los cesáres paganos, contra los bárbaros que invadian el imperio, contra la monstruosidad y la barbarie de la edad media, contra los reyes absolutos del principio de la edad moderna, y en el siglo XIX contra las pretensiones del absolutismo democrático y revolucionario!

He dicho.

**Sr. Gil**—Pido la palabra.

He oido con atencion y con placer al señor diputado que acaba de hablar, y voy á contestarle.

Declaro que el señor diputado tiene razon en gran parte de lo que ha dicho, y aunque no sé si la comision insistirá ó no sobre el artículo, creo que debe aceptar reformas tendentes á servir las ideas que acaba de indicar.

Pero encuentro que es algo exagerado lo que ha espresado: no debe borrarse por completo el recurso de fuerza.

El recurso de fuerza ha tenido y tiene su razon de ser independientemente del espíritu de absorcion del Estado sobre la iglesia ó de la iglesia sobre el Estado; obedece á principios y causas existentes á que es necesario dar lugar y efecto.

Como ha dicho el señor diputado, se ha conocido tres recursos de fuerza: el recurso en conocer, el recurso del modo de conocer y el recurso en no otorgar la apelacion. Son los tres recursos de fuerza sobre los que el derecho canónico legisla.

Desde luego, el recurso de fuerza en conocer consiste en el derecho de quejarse un ciudadano ante la justicia civil, de que la autoridad eclesiástica pretende conocer en un pleito que no le corresponde.

Es un recurso que reconoce causas que no pueden ser sujetas á la jurisdiccion eclesiástica. No se puede desconocer el derecho que tiene el ciudadano de quejarse ante la justicia del país, que comprende tambien á la Iglesia, para que ella dirima esta controversia, que, como ha dicho muy bien el señor diputado, no es sino una controversia de competencia, á punto de que podría suprimirse perfectamente el artículo que habla del recurso de fuerza, estableciendo simplemente que las cámaras de apelacion están habilitadas para dirimir las cuestiones del competencia entre las autoridades civiles y eclesiásticas.

De este modo estaria servida la idea del señor diputado, sin necesidad de recordar esto del recurso de fuerza.

Pero el recurso de fuerza en conocer es una cuestion de competencia que es imposible eliminar de la facultad inalienable que tiene el poder civil de deslindar la jurisdiccion, de declarar si es cuestion sobre bienes raices, sobre derecho de libertad, sobre derecho de tutela; en fin, si comprende algo de lo que es la jurisdiccion civil. Este no se puede cuestionar,

Ahora, el recurso de fuerza en el modo de conocer y proceder, se presenta cuando el tribunal eclesiástico altera las formas tutelares del juicio, y entónces el litigante que se cree ofendido, recurre á la justicia civil,

para que obligue á aquel á que guarde esas formas.

Pero que se obligue al juez eclesiástico á que conceda el recurso de apelacion, esto si me parece que ataca directamente el régimen interno y la libertad que, en ese régimen, deba gozar una sociedad independiente, como es la Iglesia.

Yo he de votar porque se niegue ese recurso en ese punto.

Pero es preciso reconocer que esta institucion tiene una razon plausible, y que es muy tolerable la opinion de los que creen que debe subsistir.

Este recurso ha nacido en una época en que ha debido nacer. No ha nacido de un espíritu de absorcion del Estado sobre la Iglesia; al contrario, ha nacido, de la absorcion de la Iglesia sobre el Estado.

Ha habido una época en la que legislacion de la iglesia era la legislacion comun, era la legislacion civil que regia la sociedad.

Al derecho canónico lo encontramos en la edad media, dominando todas las relaciones civiles de la sociedad, legislando sobre venta, sobre arrendamiento; enmendando, y con mucha prevision, al derecho romano.

Habia llegado y gozaba de tanta autoridad, que era muy difícil oponer á un texto de derecho canónico, uno de derecho romano.

En aquel tiempo, cuando surgieron (y tenían razon de ser) estos recursos de fuerza, la legislacion canónica no solo habia invadido completamente la esfera de la sociedad civil, sino que tambien habia invadido su jurisdiccion.

Los tribunales eclesiásticos tenían jurisdiccion sobre todos los pleitos de los clérigos. Un pleito sobre venta de inmuebles, sobre arrendamiento, sobre herencia, especialmente cuando subsistían los fueros personales, iban á la jurisdiccion eclesiástica.

Desde luego vemos á la jurisdiccion eclesiástica absorbiendo completamente á la civil, y entónces todo ultrage á las formas tutelares del juicio hacia indispensable este remedio, de que el clérigo, que á la vez era ciudadano, pudiera invocar la autoridad del Estado y decir: Señor, aquí se viola la forma tutular del juicio.

Entónces, habia una razon completamente independiente del espíritu de absorcion de una y otra potestad.

Ahora los fueros personales están abolidos. No hay sino causas de materia espiritual, que corresponden á la justicia eclesiástica. ¿Qué le importa, pues, á la potestad civil, saber si ha sido bien ó mal otorgada la apelacion en una causa de materia puramente espiritual? ¿Qué le importa saber si se han violado la formas tutelares del juicio?

En la época presente, no tienen razon filosófica de existir los recursos de fuerza. Están justificados en la historia, pero hoy no se justificarian, porque serian violatorios de la libertad de que debe gozar una sociedad independiente.

Pero el primer recurso, que consiste en el modo de conocer y proceder, está justificado por las exigencias de la sociedad.

Yo, como digo, he de estar conforme en servir á las ideas del señor diputado, en ese sentido, pero despues de esta sesion.

Y siendo la hora avanzada, podria levantarse la sesion, á fin de preparar un artículo para que, en la próxima, se vea el modo de hacer lugar al pensamiento del señor diputado, que, en general, tiene razon.

Hago, pues, mocion para que se levante la sesion.

Suficientemente apoyada esta mocion, se vota y es aprobada.

Son las 5 y 35 p. m.